



“Emergencia ambiental: ¿Te encuentras preparado para afrontarla?”

EN ESTE NÚMERO | IN THIS ISSUE

Emergencia ambiental: ¿Te encuentras preparado para afrontarla?

Environmental emergency: Are you prepared to face it?

Cambios clave en el régimen de importación para el consumo: ¿Qué nuevas modificaciones se avecinan?

Key changes in the import rules of goods for consumption: What new changes are on the horizon?

Esquelas masivas de Sunat : Rentas de fuente extranjera de personas naturales

Mass notices from Sunat: Foreign-earned income by individuals

Límites a las medidas de requerimiento de información de Sunafil

Limitations on Sunafil's information request



Emergencia ambiental: ¿Te encuentras preparado para afrontarla?

5 ESTEFANÍA MEZA MAYTA
Asociada, experta en derecho ambiental



Cambios clave en el régimen de importación para el consumo: ¿Qué nuevas modificaciones se avecinan?

8 SHINDA ORTIZ CRISOSTOMO
Abogada, experta en Comercio Exterior



COMENTARIO TRIBUTARIO

Esquelas masivas de Sunat : Rentas de fuente extranjera de personas naturales

11 LORENA RAMOS FIGUEROA
Asociada, experta en Derecho Tributario



COMENTARIO LABORAL

Límites a las medidas de requerimiento de información de Sunafil

13 JOSÉ MANUEL ANGULO JUGO
Asociado senior, experto en Derecho Laboral y seguridad social



La transformación societaria como clave para acceder al financiamiento empresarial

15 MARÍA FERNANDA GONZALEZ GARCÍA
Asociada senior, sede de Piura



Billeteras digitales: ¿Pueden las fintech competir con las empresas financieras reguladas en el Perú?

18 GIOVANNI HUAMANÍ SUÁREZ
Asociado, experto en Mercado de Capitales y Regulación Bancaria



Mi socio no se abstiene de votar en la junta a pesar de tener un interés en conflicto con la sociedad. ¿Qué es posible hacer?

ALONSO NAVEDA CAVERO
Asociado senior, experto en derecho corporativo



21 ALEJANDRO IZQUIERDO
Integrante y experto de derecho corporativo



DESDE EL CONGRESO

- * Elevar pensiones de orfandad para hijos con discapacidad.
- * Eliminar 6 feriados del calendario oficial.

24



ALERTA MÁXIMA

Protocolo de exigencias para el control migratorio de nacionales y extranjeros.

26



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- * Desayuno ejecutivo
- * Webinars y eventos exclusivos
- * World Trademark Review (WTR)

30



COLUMNAS
— REVISTA LEGAL —
NÚMERO 219

ESTUDIO MUÑIZ
MUÑIZ OLAYA MELÉNDEZ CASTRO ONO & HERRERA Abogados

Comité Editorial:
Fernando Meléndez
Arturo Ferrari
Silvia Núñez
Alexandra Ojeda

Comentarios y sugerencias:
aferrari@munizlaw.com
snunez@munizlaw.com

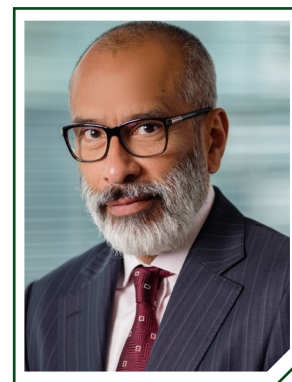
El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas.
El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N° 2007-07703

OPENSAC editor.open@gmail.com
IDEAS & SOLUCIONES T- (51) 936 645 459

“Aquel que culpa a otros tiene un largo camino que recorrer en su viaje, aquel que se culpa a sí mismo está a la mitad del camino, aquel que no culpa a nadie ha llegado a su destino.”

Proverbio chino



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ

Socio principal - editor

“Caquistocracia”¹

Tras la caída del muro de Berlín se suele sostener que triunfó la ideología occidental, pero el paso del tiempo demostró que los consensos ideológicos originaban riqueza y prosperidad. Obsérvese, por ejemplo, el caso de países occidentales con grandes programas sociales y el de países orientales con economías nada paternalistas. Hace tiempo sabemos que la política puede ser una escala de colores, donde el capitalismo y socialismo son el blanco y el negro; y las grandes y plurales reformas la escala de grises intermedia.

En el Perú, algo confundidos, seguimos viviendo contrastados; donde los que no pensamos igual que un determinado colectivo, somos el enemigo. De «facho» a «caviar»; de «DBA» a «terroristas»; etiquetas que -curiosamente- nadie sabe muy bien que significan. Tal ignorancia tiene como consecuencia en la práctica que la distancia entre los adversarios de cada grupo sea a veces inexistente.

Los enfrentamientos en nuestra «clase política» dan pie a luchas intestinas, en las que sus protagonistas, funcionarios públicos de primer orden (por ejemplo, la presidente) atacan a otros sin importar las consecuencias. Y en medio de esta circunstancia dirigen un país, en piloto automático.

En esta batahola, suscitada entre miembros del Poder Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial; la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado un procedimiento disciplinario a la presidente del Poder Judicial (PJ) y a algunos otros jueces supremos por supuestamente haber resuelto una controversia citando una norma ya derogada. La aplicación indebida de la ley deberá ser materia de discusión y debate en el fuero correspondiente, pero lo que llama la atención es el inicio tan abrupto de un procedimiento inmediato que prescinde de la investigación preliminar.

Al actuar de la JNJ lo sucedieron una serie de pronunciamientos institucionales y mediáticos de las distintas cortes superiores y de la misma Sala Plena de la Corte Suprema de la República, rechazando enérgicamente el actuar de la JNJ. Incluso el Colegio de Abogados de Lima (CAL) inició procedimientos

disciplinarios en contra de los miembros de esta entidad. Como se ve, las últimas semanas han enfrentado mortalmente a jueces, abogados y a los «jueces de los jueces»².

El respaldo a la presidente del Poder Judicial, sin embargo, es jurídico. El Tribunal Constitucional, que «curiosamente» emite siempre fallos bastante sincronizados con la coyuntura política, ha expedido dos sentencias relevantes sobre la materia. En efecto, en los expedientes 04797-2023-PA/TC (caso Víctor Ticona) y 03250-2023-PA/TC (caso Aldo Figueroa) ha dejado en claro la inconstitucionalidad del procedimiento inmediato de la JNJ; ya que tal procedimiento no tiene base constitucional ni reconocimiento en la ley orgánica de la institución (LOJNJ); por lo que su reconocimiento meramente reglamentario resulta contrario a la Constitución y a la LOJNJ.

La pregunta es: ¿pese al pronunciamiento categórico del TC, el procedimiento inmediato iniciado contra la presidente del PJ seguirá llevándose a cabo?

Mientras lo anterior acontece a vista y paciencia de todo el país, en los últimos meses, la recurrencia de muertes y crímenes violentos nos colocan en el mismo nivel de criminalidad que desde hace mucho soporta México y de un tiempo a esta parte nuestro vecino Ecuador, siendo escandalosa la ineficiencia del actual ministro del Interior y más escandaloso aun el blindaje que respecto de este hace el Congreso y especialmente la presidente de la república.

Como se aprecia nuestra situación es crítica, en consecuencia, es absolutamente necesario un mea culpa, ya que la falta de interés en los asuntos públicos por parte de las esferas más capacitadas del país (en particular) y de la ciudadanía (en general) viene ocasionando que nuestra penosa y deplorable clase política que desgraciadamente nos «dirige» haga en la práctica lo que le dé la gana. Es hora entonces de que pongamos las barbas en remojo; caso contrario la siguiente pregunta que deberemos hacernos (regresando a la alegoría sobre el piloto automático): ¿nuestro país podrá seguir siendo dirigido en modo tal, o inevitablemente nos estrellaremos en algún momento?)))

¹ Caquistocracia o kakistocracia (del griego *κάκιστος* *kakistos*, 'el peor', y *κράτος* *kratos*, 'gobierno', 'el gobierno de los peores'); es un término utilizado en análisis y crítica política para designar a un gobierno de los Estados controlado por las personas más ineptas, incompetentes y cínicas (<https://es.wikipedia.org/wiki/Caquistocracia>)

² Forma coloquial de referirse a la JNJ por las funciones fiscalizadoras propias de la entidad.

"He who blames others has a long journey ahead; he who blames himself is halfway there; he who blames no one has reached his destination."

Chinese proverb

«Kakistocracy»¹

After the fall of the Berlin Wall, it was often argued that Western ideology triumphed, but, over time, it became evident that it was ideological consensus that brought wealth and prosperity. Let us consider, for instance, the case of Western countries with extensive social programs and Eastern countries with entirely non-paternalistic economies. We have long known that politics can be seen as a spectrum of colors, where capitalism and socialism represent black and white, and major, pluralistic reforms are the shades of gray in between.

In Peru, somewhat confused, we still live in contrast, where those who do not think the same as a certain collective, are the enemy. From "facho" (a derogatory word meaning fascist) to "caviar" (derogatory term used to describe individuals with progressive, left-leaning ideas) from "DBA" (DBA stands for "Derecha Bruta y Achorada", derogatory term which translates roughly to "Brash and Ignorant Right") to "terrorists", labels that -curiously- no one seems to fully define. Such ignorance has, in practice, led to a sometimes nonexistent distance between adversaries within each group.

The confrontations within our "political class" give rise to internal struggles in which its protagonists, key public officials (the president, for instance) attack others regardless of the consequences. And, in the midst of this turmoil, they govern the country on autopilot.

In this chaotic situation among members of the Executive Branch, the Congress, the Public Prosecutor's Office, and the Judiciary, the National Board of Justice (JNJ in Spanish) has initiated an immediate disciplinary proceeding against the president of the Judiciary (PJ in Spanish) and some other supreme court judges for allegedly ruling on a case while citing a repealed law. The improper application of the law should be a matter for discussion and debate in the appropriate jurisdiction, but the sudden initiation of an immediate procedure bypassing preliminary investigation draws the attention.

The actions of the JNJ were followed by a series of institutional and media statements from various superior courts and the Full

Chamber of the Supreme Court of the Republic itself, strongly rejecting the actions of the JNJ. Even the Lima Bar Association (CAL in Spanish) has initiated disciplinary proceedings against members of this entity. As we can see, the last few weeks have been a deadly confrontation between judges, lawyers and the so-called «judges of the judges»²,

However, the support for the president of the Judiciary is rooted in legal arguments. The Constitutional Court, which "curiously" always issues rulings quite synchronized with the political situation, has issued two relevant rulings on this matter. Indeed, in cases 04797-2023-PA/TC (Victor Ticona case) and 03250-2023-PA/TC (Aldo Figueroa case) the court has clearly stated that the immediate procedure of the JNJ is unconstitutional, as it lacks constitutional grounds and is not recognized by the organic law of the institution (LOJNJ in Spanish). Therefore, its merely regulatory recognition is opposite to both the Constitution and the LOJNJ.

The question remains: Despite the categorical ruling of the Constitutional Court, will the immediate proceedings against the president of the Judiciary continue?

While all of this unfolds in plain sight of the entire country, the rise in violent crimes and murders in recent months has placed us at the same level of criminality that Mexico has long endured and that Ecuador has more recently begun to experience. The inefficiency of the current Minister of the Interior is alarming and yet even more alarming is the protection he receives from Congress and, most notably, from the President of the Republic.

As we can see, our situation is critical. Therefore, a moment of self-reflection is absolutely necessary, since the lack of interest in public affairs by the most qualified spheres of the country (in particular) and of the citizens (in general) has caused the disgraceful and deplorable political class that unfortunately "governs" us, to do whatever it pleases. Thus, it is time to be prepared. Otherwise, the question arises, returning to the autopilot analogy: Can our country continue to be governed in this manner, or are we inevitably heading for a crash?)))

¹ A kakistocracy (from the Greek *κάκιστος* *kákistos*, 'the worst', and *κράτος* *kratos*, 'government', 'the government of the worst') is a term used in political analysis and criticism to describe a government of states controlled by the most inept, incompetent and cynical individuals (<https://en.wikipedia.org/wiki/Kakistocracy>).

² A colloquial term for the JNJ due to its supervisory duties.



EMERGENCIA AMBIENTAL: ¿TE ENCUENTRAS PREPARADO PARA AFRONTARLA?

Todo titular de una actividad productiva, extractiva y de servicios deben prever que, a razón del desarrollo de sus actividades, se pueden generar eventos súbitos y significativos que representan riesgos o afectaciones a la calidad ambiental, a los ecosistemas y a la salud de las personas.

Frente a esto, mediante la Resolución de Consejo Directivo n° 018-2013-OEFA-CD, se ha dispuesto que todo aquel titular cuya actividad se encuentra en el ámbito de competencia de fiscalización ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) debe reportar los eventos que califiquen como una emergencia ambiental.

Al respecto, conforme al artículo 3 del cuerpo normativo mencionado, un evento calificará como una emergencia ambiental cuando concurren las siguientes características: (i) Es un evento súbito e imprevisible generado por causas naturales, humanas o tecnológicas¹, (ii) incide en la actividad del administrado²; (iii) genera o pueden generar un deterioro al ambiente³.

Por tanto, el titular de una actividad perteneciente al sector industria, agricultura, pesca, minería, hidrocarburos, electricidad o residuos sólidos deberá estar adecuadamente

¹ El titular no se encontraba en la posibilidad de conocer cuándo, cómo y qué magnitud tendría el evento.

² El evento sucede e impacta las actividades y componentes que se encuentran en el área de influencia directa de la actividad o requiere que al titular realice acciones frente a la emergencia

³ Consiste en todo menoscabo material del ambiente o alguno de los componentes y que genera efectos negativos actuales o potenciales.

preparado para afrontar una emergencia ambiental y presentar correctamente los reportes correspondientes ante OEFA.

Ahora bien, encontrarse preparado para atender una emergencia ambiental implica que el administrado cuente con un plan de contingencias donde se describan las acciones que tiene como fin controlar y minimizar los impactos o efectos nocivos que el siniestro ha generado o puede generar contra el ambiente y la salud de las personas.

Así pues, ocurrido el siniestro, el plan de contingencia debe ser ejecutado inmediatamente por personal capacitado, equipado y, de ser el caso, cuente con las autorizaciones y/o permisos correspondientes. Incumplir el plan de contingencia y/o la actuación no inmediata del titular implica incumplir el instrumento de gestión ambiental, acarreando una multa de hasta 15 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)⁴.

Aunado a lo anterior, el titular debe presentar el reporte preliminar dentro de las 12 horas siguientes de ocurrido el evento y, reporte final hasta 10 días hábiles después de ocurrida la emergencia ambiental mediante la plataforma PLUSD del OEFA (<https://sistemas.oefa.gob.pe/plusd/>).⁵ Los reportes deben presentarse conforme el plazo, forma y modo establecido, señalando información verdadera; caso contrario, el titular podrá ser pasible de una multa de hasta 1000 UIT⁶. Para evitar esta multa, el titular deberá reportar los datos reales del siniestro como la fecha y hora de inicio y fin, tipo de evento, ubicación, sustancias y cantidades involucradas y el total de área afectada. Adicionalmente, deberá demostrar mediante fotografías y videos fechados y georreferenciados que ha ejecutado el plan de contingencia con inmediatez y efectividad.

Asimismo, el OEFA puede visitar las instalaciones y realizar un requerimiento de información. Frente a ello, el titular deberá brindar las facilidades de acceso y entregar la documentación requerida conforme al plazo, forma o modo señalado; caso contrario, podrá ser pasible de multas de hasta 100 UIT, y en caso la información sea falsa, la multa será hasta 500 UIT⁷. Inclusive, el OEFA podrá imponer medidas preventivas que el titular deberá cumplir; caso contrario, afrontará la imposición de una multa coercitiva no menor a 1 UIT ni mayor a 100 UIT⁸.

Por lo previamente mencionado, si bien el titular de una actividad no puede advertir con anticipación la ocurrencia de una emergencia ambiental, lo que debe hacer es establecer un plan de contingencia detallado y efectivo que permita afrontar adecuadamente diferentes tipos de siniestros y así evitar la imposición de multas y/o medidas administrativas.)))



ESTEFANÍA MEZA MAYTA

Asociada, experta en derecho ambiental
Associate, expert in Environment
emeza@munizlaw.com

Todo titular de una actividad productiva, extractiva y de servicios deben prever que, a razón del desarrollo de sus actividades, se pueden generar eventos súbitos y significativos que representan riesgos o afectaciones a la calidad ambiental, a los ecosistemas y a la salud de las personas.

⁴ Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo n° 006-2018-OEFA-CD, que tipifica las infracciones administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental.

⁵ Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo n° 018-2013-OEFA-CD, que aprueba el Reglamento de Emergencia Ambientales de las actividades bajo la competencia del OEFA

⁶ Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA-CD, que tipifica las infracciones administrativas y establecer la escala de sanciones relacionadas con la eficacia de la fiscalización ambiental, aplicables para las actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA.

⁷ Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA-CD

⁸ Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión del OEFA

Environmental emergency: Are you prepared to face it?

Every holder of a productive, extractive, or service activity must anticipate that, due to the nature of their operations, significant and sudden events may arise that represent risks or impacts on environmental quality, ecosystems, and human health.

In this regard, Board of Directors Resolution No. 018-2013-OEFA-CD sets out that any holder whose activity falls within the scope of environmental oversight by the Environmental Assessment and Enforcement Agency (OEFA) must report events that qualify as an environmental emergency.

According to Article 3 of the aforementioned regulatory body, an event will qualify as an environmental emergency when it meets the following characteristics: (i) it is a sudden and unpredictable event caused by natural, human or technological factors¹, (ii) it affects the activity of the citizen²; (iii) it generates or could generate a deterioration to the environment³.

Therefore, any holder of an activity belonging to the industry, agriculture, fishing, mining, hydrocarbons, electricity or solid waste sectors must be properly prepared to address an environmental emergency and accurately submit the corresponding reports to OEFA.

To be prepared to manage an environmental emergency means that the holder must have a contingency plan outlining the actions to control and minimize the impacts or harmful effects that the incident has generated or may generate on the environment and human health.

In the event of an incident, the contingency plan must be implemented immediately by trained personnel who are equipped, and, if applicable, possess the necessary authorizations and/or permits. Failure to comply with the contingency plan and/or the non-immediate action by the holder implies a violation of the environmental management instrument, resulting in a fine of up to 15,000 Tax Units (UIT)⁴.

In addition to the above, the holder must submit the preliminary report within 12 hours of the event and the final report within 10 working days after the environmental emergency has occurred through the OEFA's PLUSD platform (<https://sistemas.oefa.gob.pe/plusd/>).⁵ The reports must be submitted in accordance with the established deadline, form and manner, containing true information; otherwise, the holder may be liable to a fine of up to 1000 Tax Units⁶. To avoid this fine, a holder must report the actual data of the incident such as date and time of beginning and end, type of event, location, substances and quantities involved and the total area affected. Additionally, he/she must demonstrate through dated and geo-referenced photographs and videos that he/she has executed the contingency plan immediately and effectively.

OEFA may also visit the facilities and request information. In such cases, the holder must facilitate access and provide the requested documentation within the specified time frame, format, or manner; failure to do so may result in the holder having to pay fines of up to 100 Tax Units, and if the information is false, the fine will be up to 500 UIT⁷. Moreover, OEFA may impose precautionary measures that the holder must comply with; otherwise, they will face a coercive fine of not less than 1 Tax Unit and not more than 100 Tax Units⁸.

Thus, while the holder of an activity cannot foresee the occurrence of an environmental emergency, it is essential to establish a detailed and effective contingency plan to adequately face different types of incidents, thereby avoiding the imposition of fines and/or administrative measures.)))

¹ The holder was not in a position to know when, how, and to what extent the event would occur.

² The event happens and impacts the activities and components located within the area of direct influence of the activity or requires the holder to take actions in response to the emergency.

³ It consists of any material or components thereof that are detrimental to the environment, generating real or potential negative effects.

⁴ Pursuant to the provisions of Article 5 of Board of Directors Resolution No. 006-2018-OEFA-CD, which classifies administrative offenses and establishes scale of penalties related to Environmental Management Instruments.

⁵ Pursuant to Article 5 of Board of Directors Resolution No. 018-2013-OEFA-CD, which approves the Environmental Emergency Regulations for activities under the jurisdiction of the OEFA.

⁶ Pursuant to Article 5 of Board of Directors Resolution No. 042-2013-OEFA-CD, which classifies administrative violations and establishes the scale of sanctions related to environmental oversight, applicable to economic activities that are under the jurisdiction of the OEFA.

⁷ Pursuant to Article 3 of Board of Directors Resolution No. 042-2013-OEFA-CD.

⁸ Pursuant to Article 35 of Board of Directors Resolution No. 006-2019-OEFA/CD, which approves OEFA's Oversight Regulations.



CAMBIOS CLAVE EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO: ¿QUÉ NUEVAS MODIFICACIONES SE AVECINAN?

El año 2024 ha sido clave para el ámbito del comercio exterior en el país, dado que se dispusieron una serie de reformas aduaneras de gran relevancia, orientadas a agilizar los trámites aduaneros. Entre estas reformas, algunas de las más significativas entrarán en vigencia el 31 de marzo y el 30 de junio de 2025, con el objetivo de optimizar los procesos de ingreso.

Así pues, el 8 de diciembre de 2024 se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución de Superintendencia No. 000276-2024/SUNAT, mediante la cual se modifica el Procedimiento Específico: "Solicitud de rectificación electrónica de declaración" DESPA-PE.00.11 (versión 3). Asimismo, el 15 de diciembre de 2024, se publicó la Resolución de Superintendencia No. 000281-2024/SUNAT, que introduce cambios en el Procedimiento General: "Importación para el consumo" DESPA-PG.01 (versión 8) y en el Procedimiento Específico: "Reconocimiento físico – extracción y análisis de muestras" DESPA-PE.00.03 (versión 4).

Entre las principales modificaciones, se incorpora una nueva condición para la destinación aduanera de las mercancías, la cual ya no solo requerirá la transmisión de la información, sino también la transmisión de la documentación digitalizada que la respalda, requisito indispensable para proceder con la numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) y, en consecuencia, para asignar el canal de control en la modalidad de despacho anticipado, la cual



SHINDA ORTIZ CRISOSTOMO

Abogada, experta en Comercio Exterior
Lawyer, expert in Foreign Trade
sortiz@munizlaw.com

El año 2024 ha sido clave para el ámbito del comercio exterior en el país, dado que se dispusieron una serie de reformas aduaneras de gran relevancia, orientadas a agilizar los trámites aduaneros. Entre estas reformas, algunas de las más significativas entrarán en vigencia el 31 de marzo y el 30 de junio de 2025, con el objetivo de optimizar los procesos de ingreso.

entrará en vigencia el 30 de junio de 2025.

Este nuevo modelo de despacho implica que el despachador de aduanas deberá transmitir obligatoriamente: i) la información de las mercancías y ii) digitalizar toda la documentación sustentatoria exigida por la legislación aduanera, proporcionada por el importador, con el fin de que se proceda con la numeración de la DAM; modificación que entrará en vigencia el 31 de marzo de 2025.

En vista de lo expuesto, resulta fundamental conocer los documentos que deberán ser transmitidos antes de la numeración de la DAM. En este sentido, el artículo 60° del Reglamento de la Ley General de Aduanas establece los documentos de sustento para el presente régimen aduanero. De igual manera, el Procedimiento General DESPA-PG.01 especifica que los documentos de sustento incluyen: a) el documento de transporte; b) la factura comercial (que también puede ser un documento equivalente o contrato); c) el comprobante de pago; y, cuando corresponda, d) el seguro de transporte; e) el documento de control emitido por el sector competente; y f) el certificado de origen.

Ante esta situación, surge la siguiente interrogante: ¿hasta qué plazo se podría transmitir los documentos para no incurrir en los nuevos supuestos de infracción incorporados recientemente en la Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas? Para ello, es importante tener en cuenta que este nuevo proceso dispone que se pueden transmitir los documentos con posterioridad a la numeración de la declaración y hasta antes del levante de la mercancía, sin perjuicio de la aplicación de la sanción de multa que corresponda, siempre que la declaración se encuentre bajo ciertas condiciones.

En principio, la multa podría evitarse si los documentos de sustento del despacho se transmiten antes de que la Sunat genere el número de la DAM; sin embargo, se debe considerar que, si se solicita la rectificación del número del documento de transporte, el número de la factura o su fecha en un canal verde y bajo la modalidad de despacho anticipado, dicha rectificación será posible sin la aplicación de multa, siempre que el medio de transporte no haya llegado al país y para el caso de la vía aérea, estos datos pueden rectificarse antes de las 24 horas después de la llegada del medio de transporte. Así, bajo estas condiciones, el riesgo de que se aplique una multa de 0.25 de la UIT o 0.1 de la UIT (si se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación por parte de la Administración Aduanera), sería mínimo.

En efecto, estas modificaciones impactarán directamente en las operaciones aduaneras, por lo que resulta fundamental que los operadores de comercio exterior y los operadores intervinientes se preparen adecuadamente para asegurar una transición fluida y minimizar el riesgo de sanciones o retrasos en sus actividades comerciales.)))

Key changes in the import rules of goods for consumption: What new changes are on the horizon?

The year 2024 has been pivotal for foreign trade in the country, as a number of significant customs reforms have been implemented, aimed at streamlining customs procedures. Among these reforms, some of the most noteworthy will come into effect on March 31 and June 30, 2025, with the aim of optimizing entry processes.

On December 8, 2024, the official gazette *El Peruano* published Superintendent Resolution No. 000276-2024/SUNAT, which amends the Specific Procedure "Request to Amend Electronic Declarations" DESPA-PE.00.11 (version 3). Additionally, on December 15, 2024, Superintendent Resolution No. 000281-2024/SUNAT was published introducing changes to the General Procedure: "Import for Consumption" DESPA-PG.01 (version 8) and the Specific Procedure: "Physical Recognition - Sample Extraction and Analysis" DESPA-PE.00.03 (version 4).

Among the main changes, a new condition for the customs clearance of goods has been introduced, which will now require the transmission of information and supporting digital documentation. This is an essential requirement to proceed with the numbering of the Customs Declaration of Goods (DAM) and, consequently, to assign the control channel in the early clearance mode, which will enter into force on June 30, 2025.

This new clearance model requires customs agents to transmit: i) information about the goods, and ii) digital files of supporting documents required by customs law, provided by the importer, in order to proceed with the numbering of the DAM; this amendment will enter into force on March 31, 2025.

In light of the above, it is crucial to understand the documents that must be transmitted prior to the numbering of the DAM. In this regard, Article 60 of the Regulations of the General Customs Law establishes the supporting documents required for this customs procedure. Similarly, General Procedure DESPA-PG.01 specifies that the supporting documents include: a) the transport document; b) the commercial invoice (which may also be an equivalent document or contract); c) proof of payment; and, when applicable, d) transport insurance; e) the control document issued by the competent authority; and f) the certificate of origin.

Given this situation, the following question arises: What deadlines exist to transmit documents to avoid incurring in the new infringement scenarios recently included in the Table of Violations for Infringements established in the General Customs Law? It is important to consider that this new process allows for the transmission of documents after the declaration has been numbered and up to the release of the goods, without prejudice to the application of the applicable fine, provided that the declaration meets certain conditions.

In principle, a fine could be avoided if the supporting documents for the shipment are transmitted before SUNAT generates the DAM number; however, it should be noted that, if a rectification of the transport document number, the invoice number or its date is requested in a green channel and under the advance dispatch mode, such rectification will be possible without the application of a fine, as long as the means of transport has not yet arrived in the country. For the air transport, these data can be rectified within 24 hours after the arrival of the means of transport. Thus, under these conditions, the risk of having to pay a fine of 0.25 of the Tax Unit or 0.1 of the Tax Unit (if corrected before any request or notice from the Customs Administration), would be smaller.

Indeed, these changes will have a direct impact on customs operations; therefore, it is essential for foreign trade operators and traders to prepare adequately to ensure a smooth transition and minimize the risk of penalties or delays in their commercial activities.)))

Esquelas masivas de Sunat : Rentas de fuente extranjera de personas naturales



LORENA RAMOS FIGUEROA
Asociada, experta en Derecho Tributario
Associate, expert in tax law
lramos@munizlaw.com

En los últimos meses, la Sunat ha notificado masivamente diversas esquelas de citación dirigidas a contribuyentes personas naturales, informando sobre supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta. En particular, se ha comunicado la detección de ingresos provenientes del exterior que calificarían como rentas de fuente extranjera no declaradas, con la finalidad de requerir información detallada sobre estas rentas presuntamente omitidas.

Estas acciones de verificación iniciadas por Sunat se han llevado a cabo en base a la información obtenida a través de reportes de jurisdicciones extranjeras, en el marco del Estándar para el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras “*Common Reporting Standard*” (CRS). En dichos reportes, las instituciones financieras del exterior han informado a la Sunat los ingresos brutos derivados de la enajenación o redención de valores, dividendos, intereses y reembolsos que habrían percibido sus clientes en sus cuentas bancarias internacionales.

Si bien cada caso debe ser analizado de forma individual, cabe señalar que los datos comprendidos en estos reportes no necesariamente implican que los contribuyentes hayan incurrido en una omisión tributaria, pues la información proporcionada no incluye las pérdidas obtenidas ni los gastos de comisiones y cargos bancarios, los cuales forman parte de la renta neta de fuente extranjera sujeta a imposición en el país.

Asimismo, es importante destacar que la Sunat utiliza el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio fiscal para determinar los montos que sustentan las inconsistencias detectadas. Esto puede generar diferencias significativas con las cifras declaradas por los contribuyentes, pues el tipo de cambio aplicable para convertir a soles las rentas obtenidas en moneda extranjera es el vigente a la fecha de percepción de dichas rentas.

Para atender estas esquelas, la Sunat ha estado otorgando plazos de respuesta sumamente cortos, incluso en los casos que ha concedido prórrogas para su atención. Esto es de suma relevancia, pues si los contribuyentes no presentan la información o documentación solicitada dentro del plazo otorgado o la presentan de forma incompleta, se configurará la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario, la cual se encuentra sancionada con una multa equivalente al 0.3% de los ingresos netos anuales, que no podrá ser menor al 10% de la UIT ni mayor a 12 UIT.

En este contexto, considerando el reciente incremento de la actividad verificadora por parte de la Sunat respecto de las rentas de fuente extranjera declaradas por los contribuyentes y los próximos vencimientos para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de personas naturales, es fundamental que los contribuyentes recuerden que las personas naturales domiciliadas en el Perú se encuentran obligadas a tributar por sus rentas de fuente mundial. Estas incluyen las rentas de trabajo (cuarta y quinta categoría), que se imputarán en el ejercicio gravable que sean percibidas y estarán sujetas al impuesto a la renta con tasas progresivas acumulativas. A dichas rentas de trabajo se adicionarán las rentas netas de fuente extranjera percibidas en el ejercicio, las cuales se determinarán conforme al artículo 51 y 51-A de la Ley del Impuesto a la Renta, según los cuales, para establecer la renta neta de fuente extranjera se compensarán las pérdidas generadas en el exterior, salvo que provengan de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición (paraísos fiscales), y se deducirán de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente.

Por lo tanto, se recomienda que los contribuyentes revisen regularmente su buzón SOL, verifiquen con anticipación su situación tributaria y la documentación de respaldo de sus ingresos del exterior, con el fin de evitar contingencias fiscales y cumplir con sus obligaciones de manera adecuada.)))

Mass notices from Sunat: Foreign-earned income by individuals

In recent months, SUNAT has issued mass notifications with a wide variety of summons to individual taxpayers, informing them of alleged inconsistencies in their annual income tax returns. Specifically, the notices state that income originating from foreign sources has been detected, which qualifies as undeclared foreign source income, with the purpose of requesting detailed information about these presumably omitted earnings.

These verification actions initiated by SUNAT have been based on information obtained through reports from foreign jurisdictions, within the framework of the Standard for the Automatic Exchange of Financial Account Information "Common Reporting Standard" (CRS). In these reports, foreign financial institutions have informed SUNAT of the gross income derived from the sale or redemption of securities, dividends, interest, and reimbursements that their clients would have received in their international bank accounts.

While each case must be analyzed individually, it is important to note that the data included in these reports does not necessarily imply that taxpayers have incurred in a tax omission. The information provided does not include losses incurred nor expenses related to commissions and bank fees, which are part of net foreign sources income subject to taxation in the country.

It is also important to highlight that SUNAT uses the exchange rate in effect at the end of the fiscal year to determine the amounts that support detected inconsistencies. This may lead to significant discrepancies with the figures declared by taxpayers, as the exchange rate applicable to convert foreign currency income into soles is the one in effect on the date those earnings were received.

To respond to these notices, SUNAT has been granting very short response deadlines, even in cases where extensions have been granted. This is extremely relevance because if taxpayers do not provide the requested information or documentation by the deadline, or if they present it incompletely, they will incur the infringement specified in item 5 of Article 177 of the Tax Code, which is subject to a fine equivalent to 0.3% of the annual net income and cannot be less than 10% of the Tax Unit or exceed 12 Tax Units.

In this context, considering the recent increase in SUNAT's verification activity regarding foreign-source income declared by taxpayers and the upcoming deadlines for filling annual income tax return for individuals, it is essential for taxpayers to remember that individuals residing in Peru are required to report and pay taxes on their worldwide income. This includes employment income (fourth and fifth income brackets), which will be attributed to the taxable year in which it is received and will be subject to income tax at progressive cumulative rates. The net foreign income received during the year will be added to the aforementioned employment income, which will be determined in accordance with Articles 51 and 51-A of the Income Tax Law. These articles state that to establish net foreign income, losses incurred abroad will be offset, unless they originate from non-cooperative countries or low or no taxation jurisdictions (tax havens), and necessary expenses to generate and maintain that income source will be deducted from the gross income.

Therefore, it is recommended that taxpayers regularly review their SOL mailbox, check their tax situation in advance, and ensure they have the supporting documentation for their foreign income, in order to avoid tax contingencies and fulfill their obligations properly.)))

Límites a las medidas de requerimiento de información de Sunafil



JOSÉ MANUEL ANGULO JUGO
Asociado senior, experto en Derecho Laboral y seguridad social
Senior associate, expert in Labor and Social Security Matters
jangulo@munizlaw.com

Recientemente, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) viene realizando inspecciones a las empresas dentro de las cuales se requiere el cumplimiento de acciones a través de medidas de requerimiento de información bajo la sanción de multa por no cumplir con la entrega de dicha información o se requiere cumplir con información que la empresa ya ha mencionado que no cuenta con la misma. Recordemos que el incumplimiento de presentar dicha documentación puede ser sancionado con una multa por obstrucción a la labor inspectiva.

Sin embargo, debemos recordar que el Reglamento de la Ley General de la Inspección de Trabajo, en su artículo 11, establece que el “requerimiento de información” tiene como objeto aportar documentación y/o efectuar aclaraciones pertinentes, NO la de requerir la realización un acto:

Artículo 11.- Modalidades de actuación

Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público.

Como se observa, por medio de la norma antes mencionada el/la inspector/a tiene facultad para requerir detalles, explicaciones o documentos a través de una medida de requerimiento de información, mas no el cumplimiento de una acción.

Inclusive, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.7.3 de la Directiva n° 001-2020-SUNAFIL/INII, “en aplicación del principio de razonabilidad, así como de los criterios de necesidad, congruencia y verdad material, la documentación que se requiera al sujeto inspeccionado debe estar vinculada con la verificación de las materias objeto de la orden de inspección; salvo en la ejecución de las actuaciones inspectivas de oficio por vulneraciones al ordenamiento sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo no previstas en la orden de inspección original, supuesto en el cual el inspector puede solicitar información referida a estos nuevos hechos.”

El Tribunal de Sunafil nos agrega señalando que no es posible de emitir una medida de requerimiento de información de documento que el inspeccionado ya ha señalado que no cuenta con el mismo o que ha acreditado la falta. Si la falta ya ha sido acreditada se deberá realizar una medida de requerimiento para subsanar, pero no una de inspección.

Así, tenemos la Resolución n° 021-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala que señala que:

6.18 En tal sentido, al tener conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del investigado, el requerimiento efectuado de fecha 19 de abril de 2021, desnaturaliza la finalidad de la misma y vulnera el principio de culpabilidad y razonabilidad.

De la misma manera la Resolución n°026-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, señala que:

(...) el emitir una medida de requerimiento teniéndose conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del investigado desnaturaliza la finalidad de la misma. Más aún si se propone sanción por la misma, siendo que se requiere el cumplimiento de una conducta que es imposible revertir en el tiempo, en razón que se requiere que acredite con documento idóneo la comunicación que realizó la inspeccionada a la compañía aseguradora (...)))

Limitations on Sunafil's information request

Recently, the National Superintendence of Labor Inspection (SUNAFIL) has undertaken inspections to various companies, during which it mandates compliance through the issuance of information request measures. Companies face potential fines if they fail to provide the requested information or if they are asked to furnish information that they have already indicated is unavailable. It is crucial to emphasize that failure to submit the required documentation may lead to sanctions for obstructing the inspection process.

However, it should be emphasized that the Regulations of the General Law of the Labor Inspection, specifically Article 11, stipulates that the purpose of "information requests" is to provide documentation and/or make relevant clarifications, RATHER THAN to mandate the performance of an action:

Article 11.- Modalities of Action

Investigative inspection activities are carried out through information requests sent via electronic communication systems, on-site inspections at workplaces, requests for the inspected party to appear before the acting inspector to provide documentation and/or make relevant clarifications or through verification of data or records held in the public sector.

As indicated by the aforementioned regulation, the inspector has the authority to request details, explanations, or documents through an information request measure; however, they do not have the authority to mandate the performance of action.

Furthermore, according to the provisions of subsection 7.7.3 of Directive No. 001-2020-SUNAFIL/INII, "in application of the principle of reasonableness, as well as the criteria of necessity, congruence, and material truth, the documentation required from the inspected party must be related to the verification of the matters addressed in the inspection order; except when conducting ex officio inspections for violations of labor or occupational health and safety regulations not foreseen in the original inspection order, in which case the inspector may request information regarding these new circumstances."

SUNAFIL Court further clarifies that it is not permissible to issue an information request measure for documents that the inspected party has already stated it does not possess or has already confirmed a fault. If the fault has already been confirmed, a remedial action request must be made, but not an inspection request.

In this context, Resolution No. 021-2022-SUNAFIL/TFL-First Chamber states:

6.18 In this regard, being aware of the impossibility of compliance on the part of the investigated party, the request made on April 19, 2021, undermines its intended purpose and violates the principles of culpability and reasonableness.

Similarly, Resolution No. 026-2025-SUNAFIL/TFL-First Chamber notes:

(...) issuing an information request measure while being aware that it is impossible for the investigated party to comply therewith undermines its intended purpose. This is particularly true if a sanction is proposed therefor, as it requires compliance with a conduct that cannot be undone with the passing of time, as the inspected party is required to produce proof of the communication sent to the insurance company. (...) ¶

La transformación societaria como clave para acceder al financiamiento empresarial

En el competitivo entorno empresarial actual, la transformación societaria se posiciona como una herramienta estratégica para acceder a financiamiento y fortalecer la sostenibilidad económica de las empresas. Este proceso, que implica el cambio del tipo societario de una empresa, permite ajustarse a las normativas del nuevo tipo social, abriendo las puertas a diversas oportunidades financieras.

¿Qué es la transformación societaria? La transformación societaria es el proceso mediante el cual una sociedad modifica su estructura jurídica sin disolverse ni liquidarse, conservando su identidad jurídica. Este cambio facilita la adaptación a las necesidades del mercado y a las demandas normativas, lo que puede ser decisivo para atraer inversión o financiamiento. Este mecanismo evita procesos dilatados, reduciendo costos y riesgos para la empresa.

Puedo precisar que la transformación permite a las empresas pasar de tipos societarios con responsabilidad ilimitada, como sociedades colectivas, a formas como las sociedades anónimas, donde la responsabilidad está limitada al capital aportado. Este

cambio no solo mejora la percepción de seguridad ante los inversores, sino que también facilita la ampliación de sus operaciones.

Hablando específicamente del vínculo entre transformación y financiamiento, la transformación responde, principalmente, a razones económicas. Muchas fuentes de financiamiento como el capital de riesgo, las incubadoras o los préstamos tradicionales requieren que las empresas cumplan con ciertas condiciones legales y financieras asociadas a un tipo societario específico.

Por ejemplo, las sociedades anónimas tienen mayor facilidad para realizar ofertas públicas de acciones o de obligaciones; mecanismos clave para captar capital. A su vez, la transformación puede optimizar la estructura fiscal de la empresa, facilitando un uso más eficiente de los recursos económicos.

Entre las principales formas de financiamiento que destacan para empresas transformadas están:

- Préstamos bancarios tradicionales: Requieren solidez y formalidad, típicamente asociadas a

sociedades con estructuras definidas.

- Capital de riesgo y business angels: Inversores que prefieren modelos de negocio claros y legalmente sólidos.
- Crowdfunding y financiamiento alternativo: Modelos más flexibles que, no obstante, valoran empresas con buena gestión financiera y transparencia.
- Subvenciones y programas gubernamentales: Apoyos que suelen requerir formalización y cumplimiento normativo.

Por lo comentado en los párrafos anteriores, puede parecer que la transformación es exclusiva de sociedades mercantiles. Sin embargo, las dinámicas económicas actuales han llevado a que otras entidades jurídicas, como asociaciones civiles, opten por transformarse para operar en mercados más amplios. Este cambio, impulsado por normativas como el Decreto Legislativo n° 882 en Perú, permite a las asociaciones educativas convertirse en sociedades con fines lucrativos, garantizando la continuidad de sus actividades y patrimonio.

Finalmente, resalto que la transformación societaria no solo representa un mecanismo legal de reorganización corporativa, sino también una oportunidad estratégica con impactos económicos significativos. En un mercado globalizado, donde las exigencias de los inversionistas y las entidades financieras son cada vez más complejas, contar con una estructura societaria adecuada puede ser la diferencia entre acceder al capital necesario para crecer o enfrentar restricciones financieras.

Este proceso permite a las empresas adecuar su marco legal para satisfacer los requisitos de diversas fuentes de financiamiento como la emisión de acciones, la participación en programas de capital de riesgo o la obtención de créditos empresariales en condiciones favorables. Asimismo, una estructura societaria sólida y formalizada mejora la percepción de confianza y reduce el riesgo asociado que los inversores suelen evaluar antes de comprometer capital. Por ello, en un contexto como el peruano, donde la competitividad empresarial y el acceso al financiamiento son desafíos recurrentes, este proceso se consolida como una herramienta esencial para la sostenibilidad y el desarrollo económico a largo plazo.)))

La transformación societaria se posiciona como una herramienta estratégica para acceder a financiamiento y fortalecer la sostenibilidad económica de las empresas. Este proceso, que implica el cambio del tipo societario de una empresa, permite ajustarse a las normativas del nuevo tipo social, abriendo las puertas a diversas oportunidades financieras.



MARÍA FERNANDA GONZALEZ GARCÍA
 Asociada senior, sede de Piura
 Senior associate, Piura Office
 mgonzalez@munizlaw.com

Corporate Transformation: A Key to Accessing Business Financing

In today's competitive business environment, corporate transformation has become a strategic tool to access financing and strengthen the economic sustainability of companies. This process, which involves changing the corporate structure of a business, allows to comply with the regulations of the new company type, opening the doors to various financial opportunities.

What is corporate transformation? The corporate transformation is the process by which a company modifies its legal structure without dissolving or liquidating, thereby preserving its legal identity. This change facilitates adaptation to market needs and regulatory demands, which can be decisive in attracting investment or financing. This mechanism avoids protracted processes, reducing costs and risks for the company.

It is important to note that transformation allows companies to move from types of partnerships with unlimited liability, such as collaborative partnerships, to forms like corporations, where liability is limited to the capital stock. Such a change not only enhances the perception of security among investors, but also facilitates the expansion of operations.

Specifically discussing the link between transformation and financing, the transformation mainly responds to economic reasons. Many sources of financing, such as venture capital, incubators, or traditional loans, require companies to meet certain legal and financial conditions associated with a specific type of company.

For example, corporations have greater ease in conducting public offerings of shares or bonds, which are key mechanisms for raising capital. Additionally, transformation can optimize the company's tax structure, allowing a more efficient use of economic resources.

Among the main financing options available to transformed companies are:

- *Traditional Bank Loans:* These require solidity and formality, typically associated with companies that have defined structures.
- *Venture Capital and Business Angels:* Investors who prefer clear and legally sound business models.
- *Crowdfunding and Alternative Financing:* More flexible models that, nevertheless, value companies with good

financial management and transparency.

- *Grants and Government Programs:* Support that usually requires formalization and regulatory compliance.

As discussed, it may seem that transformation is exclusive to commercial companies. However, current economic dynamics have led other legal entities, such as civil associations, to opt for transformation in order to operate in broader markets. This change, driven by regulations such as Legislative Decree No. 882 in Peru, allows educational associations to become for-profit companies, ensuring the continuity of their activities and assets.

In conclusion, I emphasize that corporate transformation not only represents a legal mechanism for corporate reorganization but also a strategic opportunity with significant economic impacts. In a globalized market, where the demands of investors and financial entities are increasingly complex, having an appropriate corporate structure can be the difference between accessing the necessary capital to grow or facing financial constraints.

This process enables companies to adjust their legal framework to meet the requirements of various financing sources, such as issuing shares, participating in venture capital programs, or obtaining business loans under favorable conditions. Furthermore, a solid and formal corporate structure enhances the perception of trust and reduces the risk associated with investments, which investors often assess before committing capital. Therefore, in a context like Peru, where business competitiveness and access to financing are recurring challenges, this process becomes an essential tool for long-term sustainability and economic development.)))

Billeteras digitales: ¿Pueden las *fintech* competir con las empresas financieras reguladas en el Perú?

Las empresas *fintech* se caracterizan por utilizar la tecnología para innovar productos, servicios y modelos de negocios en la industria financiera, de modo que puedan competir con el sector financiero tradicional. Dentro de estos modelos podemos encontrar a las billeteras digitales, las cuales son herramientas creadas para facilitar pagos y transferencias de dinero de manera 100% digital, promoviendo la inclusión financiera y reduciendo el uso de dinero en efectivo.

En el caso del Perú, se observa que las billeteras digitales que tienen una mayor cuota de participación en el mercado de pagos son Yape (BCP) y Plin (BBVA, Interbank y Scotiabank), ambas administradas por empresas bancarias. Esto podría tener como uno de sus motivos el hecho que, hasta hace un par de años, las billeteras no podían realizar transferencias de fondos entre sí, pues no tenían acceso a una infraestructura que lo permitiera. Como resultado, los usuarios de billeteras digitales (no bancarizadas) administradas por *fintech* estaban limitados de poder efectuar pagos y transferencias hacia las billeteras más

conocidas (Yape y Plin), lo cual generaba un evidente desincentivo para su uso.

Al respecto, con el objetivo de dinamizar el mercado de servicios de pagos digitales, el Banco Central de Reserva del Perú ("BCRP") emitió, entre otras, dos normas para fomentar la interoperabilidad en el ecosistema de pagos: (i) el Reglamento de Interoperabilidad de los Servicios de Pago (Circular No. 0024-2022-BCRP); y, (ii) el Reglamento de los niveles de calidad de los Servicios de Pago Interoperables (Circular No. 0009-2024-BCRP). La interoperabilidad consiste en propiciar que los usuarios puedan realizar transferencias y pagos digitales entre las distintas billeteras y/o herramientas análogas en el mercado, sean estas administradas por *fintech* o por empresas financieras reguladas.

El avance de la implementación de la interoperabilidad propiciada por el BCRP denota un incremento significativo en el volumen de pagos digitales; sin embargo, estas mejoras parecen no haber beneficiado en gran medida a la competitividad de las billeteras administradas por empresas *fintech*,

pues uno de los requisitos para ingresar al sistema de transacciones en tiempo real (pagos inmediatos) consiste en obtener un código de participante en la Cámara de Compensación Electrónica ("CCE"), al cual solo tienen acceso las empresas del sector financiero regulado.

Como consecuencia de lo anterior, algunos participantes del sector *fintech* se han asociado con empresas emisoras de dinero electrónico (EEDE) para poder ofrecer billeteras digitales con la capacidad de transferir fondos de manera inmediata, dado que las EEDE, en su calidad de empresas reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ("SBS"), se encuentran autorizadas para acceder a la CCE.

En esa línea, podemos mencionar el caso de Prexpe, la cual, con el respaldo de la EEDE Gmoney, se convirtió en la primera billetera digital administrada por una *fintech* en obtener un código de participante en la CCE. Gracias a ello, los usuarios de la billetera Prexpe pueden realizar pagos y transferencias de manera inmediata hacia otras billeteras digitales, e incluso hacia cuentas en instituciones reguladas (como bancos, cajas, financieras, entre otras). Asimismo, el pasado 9 de noviembre de 2024, el grupo Prex obtuvo la autorización de organización de una empresa de créditos por la SBS, en virtud de la Resolución SBS n° 03609-2024. De esta manera, Prexpe podrá convertirse en la primera billetera digital administrada por una *fintech* en ingresar al sistema financiero regulado.

Sin perjuicio de lo anterior, debemos enfatizar que las *fintech*, en general, no aspiran a incursionar en el sector regulado, dado que el costo de operación regulatorio es elevado y el procedimiento de licenciamiento suele ser complejo. Las empresas de este sector buscan que sus servicios puedan coexistir y competir de manera saludable con el sector financiero regulado, sin depender de este último.

En ese sentido, el BCRP se encuentra trabajando en un proyecto normativo para implementar una nueva fase en el esquema de interoperabilidad de pagos, la cual incluirá un modelo de acceso al ecosistema interoperable por parte de empresas *fintech* y otros participantes. Este modelo se denominaría "*open payments*" y, en principio, estará basado en una arquitectura digital abierta para facilitar la iniciación de pagos para la industria *fintech*. Se estima que la norma que apruebe este nuevo modelo podría llegar en 2026. Estaremos atentos.))

Las empresas *fintech* se caracterizan por utilizar la tecnología para innovar productos, servicios y modelos de negocios en la industria financiera, de modo que puedan competir con el sector financiero tradicional.



GIOVANNI HUAMANÍ SUÁREZ

Asociado, experto en Mercado de Capitales y Regulación Bancaria

Associate, expert in Capital Markets and Bank Regulation

ghuamani@munizlaw.com

Digital wallets: Can fintechs compete with regulated financial institutions in Perú?

Fintech companies are characterized by their use of technology to innovate products, services, and business models within the financial industry, enabling competition with traditional financial sectors. Among these models are digital wallets, which are tools designed to facilitate payments and money transfers entirely digitally, promoting financial inclusion and reducing the use of cash.

In Peru, the digital wallets with the largest market share in the payment sector are Yape (BCP) and Plin (BBVA, Interbank, and Scotiabank), both managed by banking institutions. One reason for this dominance may be that, until a couple of years ago, wallets were unable to transfer funds between each other due to a lack of access to infrastructure that facilitated such transactions. As a result, users of digital wallets (who are unbanked) managed by fintech companies were limited in their ability to make payments and transfers to the more well-known wallets (Yape and Plin), creating a clear disincentive for their use.

To stimulate the digital payment services market, the Central Reserve Bank of Peru ("BCRP") issued, among other regulations, two rules to promote interoperability within the payment ecosystem: (i) the Regulation for Interoperability of Payment Services (Circular No. 0024-2022-BCRP); and, (ii) the Regulation on the Quality Levels of Interoperable Payment Services (Circular No. 0009-2024-BCRP). Interoperability is aimed at enabling users to make digital transfers and payments across different wallets and similar tools in the market, whether managed by fintechs or by regulated financial institutions.

The progress of interoperability implementation by the BCRP indicates a significant increase in the volume of digital payments; however, these improvements seem not to have greatly benefited the competitiveness of wallets managed by fintech companies. One of the requirements to join the real-time transaction system (immediate payments) is to obtain a participant code in the Electronic Clearing House (CCE, acronym in Spanish), which is accessible only to regulated financial sector companies.

Consequently, some fintech participants have partnered with Electronic Money Issuing Companies (EEDE, acronym in Spanish) to offer digital wallets capable of transferring funds immediately, as EEDEs, regulated by the Superintendency of Banking, Insurance and Pension

Funds Managers (SBS), are authorized to access the CCE.

In this context, the case of Prexpe, backed by EEDE Gmoney, is worth mentioning since it became the first digital wallet managed by a fintech to obtain a participant code in the CCE. Hence, Prexpe users can make immediate payments and transfers to other digital wallets and even to accounts in regulated institutions (such as banks, savings and loans associations, and financial institutions). Likewise, on November 9, 2024, the Prex group received authorization from the SBS to organize a credit company, under Resolution SBS No. 03609-2024. Thus, Prexpe will be able to become the first digital wallet managed by a fintech to enter the regulated financial system.

Notwithstanding the above, it is important to emphasize that fintechs companies, in general, do not aspire to enter the regulated sector, as the cost of regulatory operation are high and the licensing process tends to be complex. Companies in this sector seek for their services to coexist and compete healthily with the regulated financial sector without relying on it.

In this regard, the BCRP is working on a rule to implement a new phase in the payment interoperability scheme, which will include a model for fintech companies and other participants to access the interoperable ecosystem. This model would be called "open payments" and will initially be based on an open digital architecture to facilitate payment initiation for the fintech industry. It is estimated that the regulation approving this new model would enter into force in 2026. We will be monitoring this development closely.)))

Mi socio no se abstiene de votar en la junta a pesar de tener un interés en conflicto con la sociedad. ¿Qué es posible hacer?

No en pocas ocasiones ocurre el caso de un accionista que, a pesar de tener un interés en conflicto con la sociedad de la que forma parte (respecto de determinado asunto tratado en una junta general de accionistas), no cumple con abstenerse de votar. ¿Qué es posible hacer ante dicha situación?

En primer lugar, cabe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley General de Sociedades (“LGS”), el cual señala:

“Artículo 133.- Suspensión del derecho de voto

El derecho de voto no puede ser ejercido por quien tenga, por cuenta propia o de tercero, interés en conflicto con el de la sociedad.

En este caso, las acciones respecto de las cuales no puede ejercitarse el derecho de voto son computables para establecer el quórum de la junta general e incomputables para establecer las mayorías en las votaciones.

El acuerdo adoptado sin observar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo es impugnable a tenor del artículo 139 y los accionistas que votaron no obstante dicha prohibición responden solidariamente por los daños y perjuicios cuando no se hubiera logrado la mayoría sin su voto.”

Al respecto, el Manual Societario de Editorial Economía y Finanzas¹, al referirse al interés en conflicto, señala: “Comprende aquellas votaciones que pudieran derivar en alguna ventaja o perjuicio indirecto para el votante”.

A su vez, la jurista Doris Palmadera², al referirse al artículo 133 de la LGS señala: “*La norma suspende a rajatabla el ejercicio del voto a todos los accionistas que potencialmente puedan obtener una ventaja personal contra los intereses de la sociedad mediante su participación en la formación de la voluntad social, aun cuando esa participación esté guiada por la decisión del accionista de salvaguardar el interés*

¹ En la sección 4/15.2 sobre “limitaciones al derecho de voto”.

² En su obra denominada “Manual de la Ley General de Sociedades”, 2da edición, pág. 234.

social. Simplemente, no deben votar"

Al respecto, podemos definir al interés en conflicto como aquella situación donde la votación a favor o en contra respecto a determinado asunto o punto de agenda podría generar una ventaja para un accionista y, a su vez, un perjuicio a la sociedad o generar un perjuicio al accionista y, a su vez, un beneficio a la sociedad.

Ahora, si bien el artículo 133 de la LGS regula un control ex post en caso de que un accionista incumpla con su deber de abstención de votar (permitiendo la impugnación judicial del acuerdo), ¿hay forma de suspender el derecho de voto del accionista antes de que se someta a votación el acuerdo? La respuesta es afirmativa. Al respecto, el Tribunal Registral, mediante Resolución 123-2010-SUNARP-TR-T, señala las siguientes dos alternativas para que se declare el interés en conflicto de un accionista respecto a determinado asunto y se le suspenda su voto: (a) que la junta previamente lo acuerde (acuerdo en el que no podría votar el accionista supuestamente conflictuado), o (b) que el presidente de la junta lo determine unilateralmente.

Cabe mencionar que, para efectos de la calificación registral del acuerdo que se solicita inscribir en el Registro Público, el registrador público no analizará si las declaraciones sobre la existencia del interés en conflicto son veraces o si el caso concreto configura realmente o no un interés en conflicto del accionista (con la sociedad), sino que se limitará a verificar si se ha dejado constancia en el acta de junta sobre el motivo que da lugar a la suspensión del voto del accionista. Sin perjuicio de ello, el accionista que considere que ha sido ilegítimamente privado de su voto podrá recurrir a la vía judicial para impugnar el acuerdo de junta adoptado y/o para requerir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (dirigiendo en este último caso su acción contra los accionistas que adoptaron el acuerdo de suspender su derecho a voto, o contra el presidente de la junta que suspendió su voto, según corresponda). De otro lado, es pertinente también señalar que, si el presidente de la junta no suspende oportunamente el voto de un accionista que tiene un interés en conflicto con la sociedad a pesar de conocer de dicho conflicto, o no promueve la votación en la junta general de accionistas para que esta decida de forma previa, si corresponde o no suspender el voto del accionista con interés en conflicto podría incluso ser eventualmente pasible de acciones de daños y perjuicios por parte de los demás accionistas

(por permitir el ejercicio ilegítimo del voto de un accionista con interés en conflicto).

En conclusión, en aquellos casos en que un accionista no cumpla con su deber legal de abstenerse de votar respecto de determinado asunto en el que tiene un interés en conflicto con el de la sociedad, es importante tener en cuenta que, si bien la LGS no contempla expresamente el procedimiento a seguir para la suspensión de su voto, la jurisprudencia del Tribunal Registral en materia societaria sí ha reconocido dos procedimientos internos o alternativas para ello, debiendo aplicar una de estas alternativas en caso corresponda.)))



ALONSO NAVEDA CAVERO
Asociado senior, experto en derecho corporativo
Senior associate, Corporate law expert
anaveda@munizlaw.com



ALEJANDRO IZQUIERDO
Integrante y experto de derecho corporativo
Member and expert in corporate law
aizquierdo@munizlaw.com

My partner does not abstain from voting at the meeting despite having a conflicting interest in the partnership. What can be done?

Q uite often happens that a shareholder, despite having a conflicting interest with the company of which they are a member (with respect to a certain matter discussed at a general shareholders' meeting), does not abstain from voting. What can be done in such a situation?

First of all, it is important to take into account the provisions of Article 133 of the General Corporations Law ("LGS" in Spanish), which states:

"Article 133. Suspension of the right to vote.

Voting rights may not be exercised by anyone who has, on his own behalf or on behalf of a third party, an interest in conflict with those of the company.

In this case, shares in respect of which voting rights cannot be exercised are computable for establishing the quorum of the general meeting and are not computable for establishing majorities in voting.

The agreement disregarding the provisions in the first paragraph of this article is challengeable under Article 139 and the shareholders who voted despite such prohibition are jointly and severally liable for damages when the majority would not have been achieved without their vote."

In this regard, the *Manual Societario (Corporate Manual) de Editorial Economía y Finanzas*¹, referring to conflicting interest, states as follows: "This includes those votes that could result in any indirect advantage or detriment to the voter."

In turn, the jurist Doris Palmadera², referring to article 133 of the General Corporations Law, points out the following: "The rule strictly suspends the exercise of the vote to all shareholders who may potentially obtain a personal advantage against the interests of the corporation through their participation in the development of the corporate will, even though such participation is guided by the shareholder's decision to safeguard the corporate interest. They simply should not vote."

In this regard, we can define a conflicting interest as a situation where voting for or against a certain matter or agenda item could generate an advantage for a shareholder and, in turn, a detriment to the company or generate a detriment to the shareholder and, in turn, a benefit to the company.

Now, although article 133 of the General Corporations Law regulates an ex post control in the event that a shareholder fails

to comply with its duty to abstain from voting (allowing for a judicial challenge of the resolution), is there a way to suspend the shareholder's right to vote before the resolution is voted? The answer is yes. In this regard, the Registry Court, through Resolution 123-2010-SUNARP-TR-T, indicates the following two alternatives for declaring the conflicting interest of a shareholder with respect to a certain matter and suspending their vote: (a) that the meeting previously agrees to it (agreement in which the shareholder allegedly in conflict could not vote), or (b) that the chairman of the meeting determines it unilaterally.

It is worth mentioning that, for the purposes of the registry qualification of the resolution requested to be registered in the Public Registry, the public registrar will not analyze whether the statements on the existence of the conflicting interest are true or whether or not the specific case actually configures a conflicting interest of the shareholder (with the company), but will only verify whether a record has been made in the minutes of the meeting regarding the reason that gives rise to the suspension of the shareholder's vote. Notwithstanding the foregoing, a shareholder who considers that they have been illegitimately deprived of their vote may resort to the courts to challenge the resolution adopted at the meeting and/or to request compensation for the damages (in this case, directing his action against the shareholders who adopted the resolution to suspend their right to vote, or against the chairman of the meeting who suspended their vote, as the case may be). On the other hand, it is also pertinent to point out that if the chairman of the meeting does not suspend in a timely manner the vote of a shareholder who has a conflicting interest with the company despite knowing of such conflict, or does not promote the vote at the general shareholders' meeting so that the latter may decide in advance whether or not to suspend the vote of the shareholder with a conflicting interest, he may even be liable to actions for damages by the other shareholders (for allowing the illegitimate exercise of the vote of a shareholder with a conflicting interest).

In conclusion, in those cases in which a shareholder does not meet their legal duty to abstain from voting on a certain matter in which they have an interest in conflict with that of the corporation, it is important to bear in mind that, although the General Corporations Law does not expressly address the procedure to be followed so as to suspend their vote, the jurisprudence of the Registry Court in corporate matters has recognized two internal procedures or alternatives for this purpose, and one of these alternatives must be applied if applicable.)))

¹ In section 4/15.2 on "limitations on voting rights".

² In his work entitled "Manual de la Ley General de Sociedades" (General Corporations Law Manual), 2nd edition, page 234.



En el primer trimestre del 2025 destacaron dos proyectos de ley. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.

Elevar pensiones de orfandad para hijos con discapacidad¹

Mediante el Proyecto de Ley n.º 10231/2024-CR², el congresista de la Bancada Cambio Democrático, Edgard Reymundo, busca modificar la Ley General de Personas con Discapacidad para elevar las pensiones por orfandad que reciben los hijos con discapacidad de los titulares.

La propuesta incorpora un apartado en el artículo 58-A de la Ley 29973, a fin de que los beneficiarios perciban un monto equivalente al 50% de la pensión del titular, debiendo no ser menor al 50% de la pensión mínima establecida en la vigente reforma del sistema previsional.

También se precisa que los hijos con discapacidad tendrán que estar acreditados en el Conadis.

Eliminar 6 feriados del calendario oficial³

El titular del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana, presentó el Proyecto de Ley n.º 10177/2024-CR⁴, que pretende reorganizar los feriados en el sector privado para convertir seis de estas fechas de descanso obligatorio en días no laborables con carácter compensable.

Actualmente, en el Perú existen 16 feriados. Sin embargo, esta iniciativa propone modificar los artículos 6, 7 y 9 del Decreto Legislativo n.º 713, así como incorporar nuevas disposiciones transitorias. De esta forma, se trasladaría al lunes siguiente los feriados que no coincidan con lunes o viernes, excepto en Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

De esta manera, se suprime el carácter feriado de fechas como la Batalla de Arica (7 de junio), San Pedro y San Pablo (29 de junio), la Conmemoración al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones (23 de julio), la Batalla de Junín (6 de agosto), la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre).

* El Estudio Muñiz presenta bimensualmente a todos sus clientes el producto legal Desde el Congreso; una publicación que contiene una selección de los proyectos de ley que están siendo discutidos el Congreso de la República y que pueden afectar al entorno empresarial. En Columnas publicaremos dos de los varios proyectos publicados y que todavía están en comisiones.

¹ (19 de febrero de 2025). Congreso plantea elevar las pensiones de orfandad que perciben los hijos con discapacidad. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2025/02/18/pensiones-de-orfandad-para-hijos-con-discapacidad-podrian-subir-segun-proyecto-de-ley-del-congresista-edgard-reymundo-hnews-1267560>

² Proyecto de ley 10231/2024-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjU4MzYz/pdf>

³ (12 de febrero de 2025). Congreso presenta nuevo proyecto de ley para eliminar 6 feriados del calendario oficial en Perú. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2025/02/11/presidente-del-congreso-presenta-proyecto-de-ley-para-eliminar-6-dias-feriados-del-calendario-oficial-en-peru-hnews-1065647>

⁴ Proyecto de ley 10177/2024-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjU2OTYw/pdf>



In the first quarter of 2025, two bills stand out. Below, we provide a summary of both legislative initiatives.

Increase Orphan Pensions for Children with Disabilities¹

Through Bill No. 10231/2024-CR, Congressman Edgard Reymundo of the Cambio Democrático caucus seeks to amend the General Law on Persons with Disabilities to raise the orphan pensions received by the children with disabilities of pension holders.

The proposal adds a section to Article 58-A of Law No. 29973, ensuring that beneficiaries receive an amount equivalent to 50% of the pension of the holder, which shall not be less than 50% of the minimum pension established in the current reform of the pension system.

Furthermore, it specifies that children with disabilities must be registered with the National Council for the Integration of Persons with Disabilities (CONADIS).

Removal of 6 Holidays from the Official Calendar¹

The Speaker, Eduardo Salhuana, introduced Bill No. 10177/2024-CR, intended to reorganize the holidays in the private sector by converting six statutory holidays into statutory paid holidays.

Currently, there are 16 paid holidays in Peru. However, this initiative proposes to amend Articles 6, 7, and 9 of Legislative Decree No. 713, as well as to incorporate new transitional provisions. Consequently, holidays that do not fall on a Monday or Friday would be moved to the following Monday, with the exception of national holidays such as Independence Day, Christmas, and New Year's Day.

Thus, the holiday status would be removed from dates such as the Battle of Arica (June 7), Saint Peter and Saint Paul (June 29), the Commemoration of the Heroic Sacrifice of Captain FAP José Abelardo Quiñones (July 23), the Battle of Junín (August 6), the Immaculate Conception (December 8), and the Battle of Ayacucho (December 9).))

^{*} Estudio Muñoz delivers to all its clients the legal publication "From the Congress" every two months. This publication contains a selection of bills currently being discussed in the Congress of Peru that may impact the business environment. In column form, we will publish two of several bills which are still under review by Congress Committees.

¹ (February 19, 2025). Congress Proposes to Increase Orphan Pensions for Children with Disabilities. La República, Peru. <https://larepublica.pe/economia/2025/02/18/pensiones-de-orfandad-para-hijos-con-discapacidad-podrian-subir-segun-proyecto-de-ley-del-congresista-edgard-reymundo-hnews-1267560>

² Bill No. 10231/2024-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjU4MzYz/pdf>

³ (February 12, 2025). Congress presents new bill to eliminate 6 holidays from the official calendar in Peru. The Republic of Peru. <https://larepublica.pe/economia/2025/02/11/presidente-del-congreso-presenta-proyecto-de-ley-para-eliminar-6-dias-fenados-del-calendario-oficial-en-peru-hnews-1065647>

⁴ Bill No. 10177/2024-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjU2OTYw/pdf>

PROTOCOLO DE EXIGENCIAS PARA EL CONTROL MIGRATORIO DE NACIONALES Y EXTRANJEROS

APRUEBAN EL PROTOCOLO DE EXIGENCIAS PARA EL CONTROL MIGRATORIO DE INGRESO O SALIDA DEL PAÍS DE NACIONALES Y EXTRANJEROS

¿Qué norma se ha emitido?

Mediante Resolución de Superintendencia N° 000018-2025-MIGRACIONES de fecha 30 de enero del 2025 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de enero del 2025 se aprobó el Protocolo de Exigencias para el Control Migratorio de ingreso o salida del país de nacionales y extranjeros.

¿Cuáles son las principales novedades y exigencias para el control migratorio?

Entre las principales novedades y exigencias tenemos:

1. Prerregistro migratorio: se realiza a través de un formulario que las personas nacionales o extranjeras realizan -a través de plataformas digitales habilitadas por Migraciones- dentro de las 48 horas previas a su viaje y antes de presentarse en los Puestos de Control Migratorio, Puestos de Control Fronterizo o Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF).

2. Enrolamiento biométrico: se implementa el registro biométrico de nacionales y extranjeros para fortalecer la seguridad y prevenir fraudes documentales. Se realiza por las personas nacionales o extranjeras que efectúan su control migratorio.

3. Control secundario reforzado: Los oficiales migratorios podrán solicitar apoyo policial en caso de sospecha de sobre la comisión de un delito, detecte inconsistencia o sospecha respecto de la autenticidad de la información o documentación proporcionada, presente situación migratoria irregular, u otras circunstancias graves que lo ameriten. Si bien ya se encuentra regulado, se reitera esta facultad de fiscalización,

Además, se consolidan las exigencias para el ingreso y salida de nacionales y extranjeros al país, entre los que tenemos:

- a. El control migratorio se realiza de manera personalísima.
- b. Migraciones tiene facultad para determinar el ingreso o salida del país de la persona nacional o extranjera, previa evaluación y cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
- c. Las personas nacionales y extranjeras deben comportarse de manera adecuada en el recinto migratorio, caso contrario, Migraciones determina la aplicación de las medidas establecidas en el Decreto Legislativo 1350.
- d. Las empresas de transporte internacional deben cumplir con las disposiciones y exigencias establecidas en la normativa migratoria vigente y conforme a los acuerdos

y tratados de los cuales el Perú forma parte; caso contrario, Migraciones determina la aplicación de las medidas establecidas en el Decreto Legislativo 1350.

- e. Las personas de nacionalidad peruana y extranjera deben presentar y/o acreditar ante el control migratorio, las exigencias necesarias para efectuar su ingreso o salida del territorio peruano.
- f. Las personas extranjeras que requieran efectuar su ingreso al territorio peruano y presenten como documento de viaje el pasaporte, este debe ser emitido válidamente por un Estado y con una vigencia mínima de 06 meses, salvo excepciones.
- g. Los menores de edad no deben efectuar el control migratorio a través de las puertas electrónicas.
- h. Las personas extranjeras que cuenten con un trámite pendiente de cambio de calidad migratoria o prórroga de residencia deben contar con la autorización de estadía fuera del país para cada salida del territorio peruano.

¿Cuándo entra en vigencia?

El Protocolo entrará en vigencia con la entrada en funcionamiento del control migratorio en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la cual se proyecta que será el 30 de marzo de 2025, de acuerdo a la última comunicación fue anunciada el pasado 15 de enero del 2025 por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, luego de sostener una reunión de coordinación con todos los representantes de la comunidad aeronáutica.

Puede acceder al texto completo de la Resolución de Superintendencia N° 000018-2025-MIGRACIONES en los siguientes enlaces URL:

<https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2367155-1> y <https://www.gob.pe/institucion/migraciones/normas-legales/6423571-000018-2025-migraciones>

PROTOCOL REGARDING TRAVEL CONTROL REQUIREMENTS FOR CITIZENS AND ALIENS

APPROVAL OF THE PROTOCOL REGARDING TRAVEL CONTROL REQUIREMENTS FOR CITIZENS AND ALIENS ENTERING OR LEAVING THE COUNTRY

What regulation has been issued?

By means of Superintendence Resolution No. 000018-2025-MIGRACIONES dated January 30, 2025 and published in the Official Gazette El Peruano on January 31, 2025, the Protocol Regarding Travel Control Requirements for the Citizens and Aliens Entering or Leaving the Country was approved.

What are the main updates and requirements to travel control?

The main updates and requirements include:

1. Pre-Registration for Migration: Citizens or Aliens must fill out a form and submit it using the digital platforms enabled by the Migrations Office within 48 hours prior to their trip and before presenting themselves at the Migratory Check Points, Border Checkpoints or Binational Border Checkpoints (CEBAF).

2. Biometric Enrollment: The implementation of biometric registration for citizens and aliens aims to strengthen security and prevent document fraud. This is to be conducted by individuals undergoing migratory control.

3. Enhanced Secondary Control: Migration officers are authorized to request police assistance if there is suspicion of criminal activity, inconsistencies or doubts regarding the authenticity of the information or documentation provided, irregular migratory status, or other serious circumstances warranting such action. While this authority is already regulated, its reinforcement is reiterated.

Additionally, the requirements for the entry and exit of citizens and aliens are consolidated, which include:

- a. Migration control must be conducted directly by the individual.
- b. The Migration Office has the authority to determine the entry or exit of citizens or aliens, subject to evaluation and compliance with current legal provisions.
- c. Citizens and foreigners must behave appropriately in the migration area; otherwise, the Migrations Office will impose the measures established in Legislative Decree 1350.
- d. International transportation companies must comply with the provisions and requirements established in current migration regulations and in accordance with agreements and treaties to which Peru is a party; failure to do so will result in the application of the measures established in Legislative Decree 1350.

- e. Peruvians and aliens must present and/or validate the necessary requirements for their entry or exit from Peruvian territory at migration checkpoints.
- f. Aliens wishing to enter Peruvian territory must present a valid passport issued by a State with a minimum validity of six months, except under certain circumstances.
- g. Minors must not undergo migratory control through electronic gates.
- h. Aliens with pending applications for a change in migratory status or extension of residence must obtain authorization for their stay outside the country for each exit from Peruvian territory.

When does it become effective?

The Protocol will come into effect with the commencement of migration control in the new terminal of Jorge Chávez International Airport, scheduled for March 30, 2025, as announced in the latest communication on January 15, 2025, by the Minister of Transportation and Communications, Raúl Pérez Reyes, following a coordination meeting with representatives of the aviation community.

The full text of Superintendence Resolution No. 000018-2025-MIGRACIONES can be accessed at the following URLs:

<https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2367155-1> and <https://www.gob.pe/institucion/migraciones/normas-legales/6423571-000018-2025-migraciones>.

Desayuno ejecutivo

El Estudio Muñiz celebró su primer desayuno ejecutivo del año, donde participaron como expositores Ricardo Herrera, socio principal del área de Derecho Laboral y Seguridad Social, quien habló sobre las tendencias jurisprudenciales laborales; Eduardo González, socio principal del área de Comercio Exterior, quien explicó los cambios en el procedimiento de exportación 2025; y Carlos Morán, socio senior del área de Procesos de Selección, quien expuso sobre el nuevo reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.)))

Estudio Muñiz hosted its first executive breakfast of the year, featuring keynote speakers Ricardo Herrera, Senior Partner of the Labor Law and Social Security Area, who discussed labor jurisprudential trends; Eduardo González, Senior Partner of the Foreign Trade Area, who explained the changes in the export procedure 2025; and Carlos Morán, Senior Partner of the Procurement and Selection Processes Area, who spoke about the new regulations under the General Act of Public Procurement.)))



Webinars y eventos exclusivos

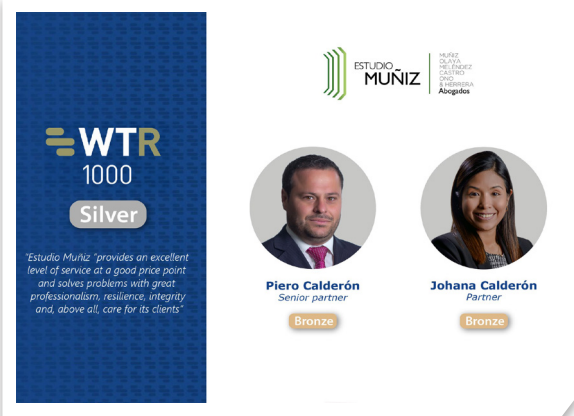
Nuestro estudio realizó diferentes webinars y eventos exclusivos para clientes, donde se abordaron temas como el nuevo reglamento de protección de datos personales, los programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor y los proyectos en activos.)))

Our firm conducted several exclusive webinars and events for clients, addressing topics such as the new personal data protection regulations, consumer protection compliance programs, and ongoing asset projects.)))

World Trademark Review (WTR)

Nuestro departamento de marcas, encabezado por Piero Calderón, socio senior del área de Propiedad Intelectual, y Johana Calderón, socia de dicha área, fue reconocido por la prestigiosa publicación World Trademark Review (WTR), la principal guía mundial que identifica a los estudios de abogados en el ámbito marcario.)))

Our Trademark Department, headed by Piero Calderón, Senior Partner of the Intellectual Property Area, and Johana Calderón, Partner in the same Area, were recognized by the prestigious publication World Trademark Review (WTR), the leading global guide that identifies top trademark law firms.)))





Chambers and Partners Global

Estudio Muñoz es considerado como una de las firmas más destacadas del mercado legal peruano en la edición 2025 de Chambers and Partners Global.)))

Estudio Muñoz is recognized as one of the most prominent firms in the Peruvian legal market in the 2025 Edition of Chambers and Partners Global.)))

Tendencias

Los expertos legales de nuestra firma prepararon un informe sobre los cambios y posibles nuevos escenarios normativos para el 2025 en una serie de sectores económicos y áreas de especialización.)))

Legal experts from our firm prepared a report on the changes and potential new regulatory scenarios for 2025 across various economic sectors and areas of expertise.)))



Fiesta de fin de año

Estudio Muñoz celebró su fiesta de fin de año 2024. Agradecemos el esfuerzo y trabajo de todos los integrantes de nuestra firma, entregamos un reconocimiento a quienes nos acompañan desde hace 25 años y recordamos distintos momentos que nos han ayudado a fortalecer nuestro sentido de organización.)))

Estudio Muñoz held its 2024 year-end celebration and expressed appreciation for the dedication and contributions of all firm members. During this event, we recognized the commitment of individuals who have been with us for 25 years, and took the opportunity to reflect on significant moments that have strengthened our organization.)))



Asesorías

Asesoramos a Volcom Capital Petit Thouars en la venta a Aenza de un edificio corporativo por USD 19.5 millones. También lo hicimos con nuestro cliente Ajiles Perú, propietario de las tiendas 3A, en la evaluación de 100 establecimientos comerciales en Lima Metropolitana y Callao para la obtención de diferentes permisos municipales.)))

We provided comprehensive advisory services to Volcom Capital Petit Thouars in the successful sale of a corporate building to Aenza for USD 19.5 million. Additionally, we worked with our client Ajiles Perú, the owner of 3A stores, in assessing 100 commercial establishments throughout Metropolitan Lima and Callao to obtain various municipal permits.)))



Las Begonias 475, Piso 6
Lima 27 - Perú

T (51-1) 611-7000



www.munizlaw.com



ESTUDIO
MUÑOZ

MUÑOZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chíncha - Cusco - Piura - Chiclayo - Chimbote - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca